

104-D-17

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día doce de julio de dos mil diecinueve.

Por agregado el escrito presentado el día uno de los corrientes por [REDACTED] [REDACTED] por medio del cual interpone recurso de revisión de la resolución pronunciada por este Tribunal a las quince horas con diez minutos del día dieciocho de junio del presente año (fs. 21 al 23).

En la decisión impugnada se declaró improcedente la denuncia interpuesta por [REDACTED] [REDACTED] puesto que del análisis de los hechos consignados en la misma se advirtió que el denunciante solicitaba a este Tribunal pronunciarse sobre la supuesta ilegalidad por parte de empleados de la Procuraduría para la defensa de Derechos Humanos –PDHH–, ya que estos últimos habrían incumplido sus atribuciones otorgadas por la ley.

El recurrente invoca como fundamento de su denuncia la existencia de vicios formales, la vulneración de los deberes éticos y legales de los funcionarios públicos, particularmente la infracción a los artículos 18 de la Constitución, 6 letra i) de la Ley de Ética Gubernamental –LEG–, a causa de la falta de resolución de la PDDH; así también indica la falta de ponderación por parte de este Tribunal en cuanto a la afectación al interés público por cuanto se habría lesionado su interés particular y derecho constitucional.

Además, afirma que la declaratoria de incompetencia dictada por ese Tribunal para conocer violaciones a los derechos civiles del recurrente, “todos relacionados a su despido ilegal de la Honorable Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, han sido vistos fuera del contexto filosófico definitorio del concepto ética; es decir, el bien y el mal” (sic).

Agrega que “la desidia, la falta de aprobación de los fines institucionales, la indiferencia, la negligencia, y así sucesivamente, son Valores Humanos Universales Negativos, por tanto, ímprobos, anti-éticos. (...) Así pues, ante la falta de cumplimiento de un precepto constitucional, además ‘Delito’, es una violación de la Ética pública por parte de la PDDH” (sic).

Finalmente, manifiesta que el acto de introducir un arma de fuego artesanal al interior de las instalaciones de la Asamblea Legislativa con el fin de intimidarle es ilegal, ímprobo y anti-ético. Por tanto, solicita a este Tribunal sea revisada la resolución en comento con base en los argumentos antes descritos.

Antes de emitir el pronunciamiento respectivo, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. Sobre el recurso de *revisión* interpuesto por [REDACTED] contra la resolución pronunciada a las quince horas con diez minutos del día dieciocho de junio del presente año (f. 19), es importante recordar que el *derecho a recurrir* o *derecho a los medios impugnativos* es un derecho de naturaleza constitucional procesal que, si bien esencialmente emana de la ley, está constitucionalmente protegido en cuanto faculta a las partes intervinientes en un proceso o procedimiento a agotar todos los medios para obtener una reconsideración de la resolución impugnada por parte del tribunal o ente administrativo superior en grado de

conocimiento; tal como lo reconocen –entre otras– las sentencias de fechas 21-VIII-2013 y 18-X-2013, dictadas en los procesos de amparo referencias 498-2011 y 484-2012, respectivamente.

Cabe destacar que ese derecho adquiere connotación constitucional precisamente cuando el legislador ha previsto un medio para la impugnación de las resoluciones emitidas en un proceso o procedimiento concreto o para una clase específica de resoluciones; pero ello no significa bajo ninguna perspectiva –como se estableció en la improcedencia del 19-V-2004, amparo 298-2004– que el juzgador, ante la inexistencia del mismo o su prohibición expresa, inventará un medio de impugnación y su trámite con plena discrecionalidad y arbitrariedad.

De esta manera, corresponde apuntar que en materia de medios impugnativos, la LEG en su artículo 39, únicamente regula el *recurso de reconsideración* contra la resolución que ordena el archivo de las diligencias o contra la resolución final; es decir, contra aquellas resoluciones que ponen fin al procedimiento, como lo precisa el artículo 101 del RELEG.

No obstante lo anterior, el artículo 163 inciso 1º de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) –normativa vigente de carácter general que regula la actividad y los procedimientos que corresponde seguir a toda la Administración Pública y que resulte aplicable al presente caso–, establece que *“La presente Ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos, por tanto, quedan derogadas expresamente todas las Disposiciones contenidas en Leyes Generales o Especiales que la contraríen (...)”*.

Ahora bien, según el artículo 132 de la LPA el recurso de reconsideración procede contra “actos definitivos”, y los artículos 123 y 134 de la cita Ley determinan que en la vía administrativa serán recurribles en *apelación* los actos de trámite que *pongan fin al procedimiento haciendo imposible su continuación, decidan anticipadamente el asunto de que se trate o cuando produzcan indefensión o un daño irreparable* ante el superior jerárquico de quien hubiera dictado el acto o ante el órgano que determine la Ley,

En ese sentido, para este caso concreto, si bien el denunciante manifiesta presentar recurso de revisión, al no cumplir con los requisitos legales que determina el artículo 136 de la LPA debe entenderse que se trata del recurso de reconsideración regulado en los artículos 39 de la LEG y 132 de la LPA antes relacionados.

Desde esa perspectiva se advierte que el acto administrativo reclamado es un acto de trámite cualificado –pues pone fin al procedimiento haciendo imposible su continuación–, por lo que su impugnación debe efectuarse mediante el recurso de apelación cuya resolución compete al superior jerárquico de quien hubiera dictado el acto o el órgano que determine la Ley; sin embargo, a tenor de lo dispuesto en la LEG el Pleno es la máxima autoridad en la estructura organizativa del Tribunal sin que exista otro ente administrativo competente para resolver dicho recurso.

Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que *“la Administración Pública admitirá y tramitará el recurso administrativo interpuesto cuando se cumplan ciertos requisitos legales y formales”*. De ahí que de forma general se exija (entre otros supuestos) que se trate de una resolución recurrible”. (Sentencia de fecha 06-IV-2017, emitida en el proceso referencia 147-2014).

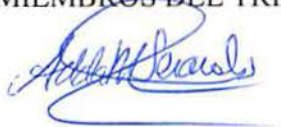
De acuerdo entonces con el Principio de Legalidad, el recurso interpuesto por [REDACTED] no es admisible por impugnar un acto del que sólo puede plantearse recurso de apelación en los términos que regula la Ley de Procedimiento Administrativos, quedando en todo caso a salvo el derecho de interponer los medios de impugnación judicial que considere convenientes contra la decisión adoptada por este Tribunal en el presente procedimiento.

Por tanto, con base en lo dispuesto en los artículos 37, 39 de la LEG; 90, 92 y 101 de su Reglamento; 123, 124 incisos 1º y 2º, 134, 136 y 163 inciso 1º de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Tribunal **RESUELVE**:

Declárese inadmisibile el recurso de reconsideración interpuesto por [REDACTED]



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN.



Co8